



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, catorce de julio de dos mil veintitrés

A23-049

ASUNTO: APELACIÓN AUTO – ordinario laboral
DEMANDANTES: **BLANCA NORVY BUITRAGO VELASQUEZ**
DEMANDADOS: **PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.**
RADICADO: 05001-31-05-0014-2022-00105-01
DECISIÓN: **REVOCA** auto que niega llamamiento

LINK: [23-049 \(014-2022-00105\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por Porvenir S.A. contra la decisión emitida el 9 de febrero de 2023 mediante la cual el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín denegó por improcedente el llamamiento en garantía a Colpensiones.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 23** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

Solicita la demandante que tras declararse que las sociedades demandadas son responsables tanto por la omisión en su deber de información al momento del traslado, como de los daños patrimoniales ocasionados, se condene a Protección S.A. y Porvenir S.A. a reconocer y pagar una suma periódica a modo de sanción equivalente a la mesada pensional que recibiría de haberse pensionado en el régimen de prima media, desde septiembre de 2020 hasta que Colpensiones asuma el pasivo pensional (dado que en anterior proceso ordinario laboral se declaró la nulidad del traslado al RAIS), además de la suma de \$38.380.011 por concepto de retroactivo de las mesadas pensionales causadas entre febrero de 2020 y septiembre de 2021. Y las costas del proceso.

Al contestar la demanda PORVENIR S.A., en escrito separado, llamó en garantía a la Administradora Colombiana de Pensiones con fundamento en el art. 64 del CGP, aduciendo que:

1. La señora BLANCA NORVIY BUITRAGO VELASQUEZ se afilió al Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.
2. Con posterioridad, el 01 de julio de 1994, la demandante se traslada del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual a la AFP Porvenir S.A.
3. El día 27 de septiembre de 2018, la demandante radicó demanda laboral, la cual entró a reparto del Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá
4. En este proceso, el día 12 de abril de 2020, se profirió sentencia declarando la ineficacia de la afiliación efectuada al RAIS y en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el apoderado de mi representada y de la AFP Protección S.A., se envió el mismo al Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, el cual emitió fallo el día 08 de febrero de 2021, confirmando la declaratoria de la ineficacia.
5. Posteriormente, el día 21 de junio de 2021, el proceso fue devuelto al Juzgado de origen y el 01 de diciembre de 2021, se profirió Auto que aprobaba la liquidación en costas y ordenaba el archivo del mismo.
6. Considera la demandante que mi representada y la AFP Protección S.A., deben ser declaradas responsables porque en virtud a la supuesta falta al deber de información, la demandante no pudo pensionarse en el Régimen de Prima Media cuando acreditó el cumplimiento de los requisitos para tener acceso a la misma.
7. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario llamar en garantía a la Entidad referida para que, responda por las sumas de dinero que en virtud de una posible condena sean impuestas a mi representada, ya que Porvenir S.A. no tiene en su haber dinero alguno de la demandante y en todo caso, al existir en la actualidad una Sentencia debidamente ejecutoriada, a través de la cual se ordena el regreso al Régimen de Prima Media, será la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, la Entidad competente para el reconocimiento de la prestación económica de vejez, previa acreditación de requisitos y acorde con la normatividad vigente y cualquier retardo injustificado en tal reconocimiento, será imputable exclusivamente a Colpensiones.

PETICIÓN

Que en el remoto e hipotético evento que sobre mi representada ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., sea impuesta algún tipo de condena relativa al pago de perjuicios al interior del presente proceso, dicha condena sea imputable en su totalidad a la Entidad llamada en garantía en el presente documento, por ser esta Entidad quien posee los dineros que la señora BLANCA NORVIY BUITRAGO VELASQUEZ ha cotizado durante toda su vida laboral

El 9 de febrero de 2023 el a quo negó por improcedente dicho llamamiento, decisión contra la cual la entidad llamada a juicio interpuso y sustentó recurso de reposición y en subsidio apelación, el primero resuelto en forma desfavorable el día 27 del mismo mes y año.

2. ARGUMENTOS.

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

Precisó que acorde con las pretensiones y hechos de la demanda, además de lo normado en el art. 64 del CGP, NO existía sustento legal o contractual para que Porvenir S.A. llamara en garantía a

Colpensiones. Recordó que las súplicas indemnizatorias se fundamentaban en las consecuencias de la «ineficacia del traslado de régimen», en cuyo acto jurídico (el del traslado primigenio de régimen que fue declarado en sentencia con efectos de cosa juzgada), no intervino el ISS, hoy Colpensiones. Y añadió:

Ahora bien, el argumento según el cual la premisa para sustentar el llamamiento en garantía es que el reconocimiento de la pensión de vejez de la actora se vio retrasado mientras se tramitaba el proceso jurisdiccional de inejecución del traslado de régimen, para nada comprometen el rol legal de COLPENSIONES, en relación con la pretensión de indemnización de perjuicios de que trata la presente demanda

Al resolver el recurso de reposición, reiteró lo antes expuesto e indicó que NO existía sustento legal o contractual para que Porvenir S.A. llame en garantía a Colpensiones.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN PORVENIR S.A.

Considera viable el llamamiento en garantía realizado, pues la reclamación principal de la demandante y en el hecho en el cual fundamenta su solicitud de perjuicios, es el retardo en el reconocimiento de la prestación económica por vejez, siendo Colpensiones quien debía pronunciarse sobre el mismo, ya que en virtud del proceso con radicación 11001310503020180059800, era la entidad que actualmente administraba los recursos de la demandante.

En lo que respecta a las omisiones endilgadas a Porvenir S.A. en la demanda, resaltó que la selección inicial a uno de los regímenes del Sistema de Pensiones establecidos en la Ley 100 de 1993, se hizo en este caso al de Prima Media con Prestación Definida, por lo que la respectiva administradora ha debido darle a la actora la información suficiente sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales.

Resaltó que la selección libre y voluntaria a cualquiera de los regímenes prevista en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, es un derecho de todos los afiliados incluyendo, desde luego, a quienes al momento en que este entró a regir, 1 de abril de 1994, contaban con una afiliación vigente al régimen de prima media con prestación definida, administrado en ese momento por el Instituto de Seguros Sociales.

Que por ello NO existe ninguna razón que permita concluir que esa obligación no debía ser atendida por el ISS respecto de quienes lo seleccionaron, así fuera en forma tácita el 1 de abril de 1994, puesto que en ese momento ya estaba en vigencia el citado artículo 13, del que se deriva esa obligación.

Que NO puede existir un trato diferenciado entre quienes optan por el régimen de ahorro individual y quienes lo hacen por el de prima media, consistente en que para estos no existe ningún derecho a recibir una información suficiente sobre las implicaciones de su decisión, mientras que aquellos sí tienen derecho a una asesoría que les permita conocer las características de los dos regímenes y las consecuencias de su decisión.

Que conforme los argumentos esgrimidos, es palmario que el administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida no es un simple espectador indiferente sin ninguna responsabilidad en la ilustración de quien tomó la decisión de seleccionarlo para manejar su futuro pensional y por ello también le corresponde acreditar que cumplió con la obligación a su cargo en esa materia.

En cuanto a la procedencia del llamamiento en garantía, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de Sentencia SL 2548 del 02 de junio de 2021, radicación N° 77609, recordó que:

“... el llamamiento en garantía previsto en el artículo 57 del CPC, vigente para la época de la interposición de la demanda, permite que quien es demandado vincule al debate a un tercero, para que, en virtud de un nexo legal o contractual, responda por las condenas que se le impongan, en el evento en que el convocante resulte desfavorecido con la sentencia que ponga fin al proceso, como consecuencia de la condena impuesta”.

Que así las cosas, de acuerdo con lo aducido y lo regulado en el art. 64 del CGP, cuyo contenido cita, es claro que Porvenir se encuentra facultada para realizar el presente llamamiento, dado que quien pretenda llamar en garantía a otro, podrá pedirlo en la demanda o dentro del término legal para contestarla, para que se resuelva sobre tal relación, pues solo bastará afirmar que tiene derecho legal o convencional a exigir, de ese otro, la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como consecuencia de una eventual condena dictada en la sentencia.

Que así lo expuso el Tribunal Superior de Medellín el 20 de octubre de 2022, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negaba el llamamiento en garantía realizado por Porvenir S.A. a Colpensiones, dentro del proceso ordinario laboral con radicado 2022-00037 y en el cual resolvió lo siguiente:

“REVOCAR el auto interlocutorio apelado del 30 de junio de 2022, dictado por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante el cual se negó el llamamiento en garantía realizado por PORVENIR S.A. a COLPENSIONES, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por la señora LUZ MIRIAM VARGAS VARGAS en contra de PORVENIR S.A., y en su lugar, se ORDENA al Juzgador de primera instancia que se pronuncie sobre la admisión del llamamiento en garantía teniendo en cuenta la motivación de esta providencia y lo dispuesto en los artículos 65 y 66 del Código General del Proceso”.

En este orden de ideas, considera que basta con indicar que le asiste un derecho a ser resarcido, si eventualmente se ve obligado a reconocer los perjuicios de que trata la demanda incoada en su contra, máxime cuando nos encontramos frente a una obligación de índole legal, pues se está alegando que la llamada en garantía incumplió la obligación consagrada en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, esto es, la de brindar información suficiente, necesaria y comprensible a la demandante.

2.3. ALEGATOS

Únicamente se pronunció Porvenir S.A.

Expuso que el art. 64 del CGP no exigía que el llamante tuviera el derecho legal o contractual, como si lo requería el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, por lo que basta que subjetivamente considere el llamante en garantía, que le asiste el derecho a ser resarcido de los pagos que eventualmente se vea abocado a reconocer, y la existencia de cualquier vínculo jurídico entre el llamante y el llamado, en relación con el objeto concreto de la litis, para que proceda la citación procesal en comento.

Que en caso de condena, es el operador judicial quien determinará si se encuentra acreditada la obligación de responder en cabeza del llamado al momento de dictar sentencia, pero esto se ha de determinar en el curso del proceso, no en una instancia previa como lo es la admisibilidad del llamamiento en garantía.

Es así como insiste que se encuentra facultada para realizar el presente llamamiento en garantía, reiterando lo expuesto en el recurso de alzada. Posteriormente indica que:

2. FRENTE AL OBJETO DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA:

LA ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA HA DEBIDO DARLE A LA ACTORA LA INFORMACIÓN SUFICIENTE SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES, ACCESO, EFECTOS Y RIESGO DE CADA UNO DE LOS RÉGIMENES PENSIONALES.

La selección libre y voluntaria a uno cualquiera de los regímenes prevista en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 es un derecho de todos los afiliados al Sistema General de Pensiones, incluyendo, desde luego, a quienes al momento en que este entró a regir, 1 de abril de 1994, contaban con una afiliación vigente al régimen de prima media con prestación definida, administrado, en ese momento, por el Instituto de Seguros Sociales. Si un afiliado optó por seguir vinculado a ese régimen cuando entró a regir la Ley 100 de 1993, es claro que en ese momento lo seleccionó, así para ello no fuera necesario diligenciar el formulario en el que constara su vinculación, tal como lo establece el artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Si, como ha dicho la jurisprudencia en forma reiterada, la selección libre y voluntaria de un régimen pensional exige un conocimiento suficiente de los dos regímenes, por razón de lo

cual las administradoras están en la obligación de suministrar una información suficiente y comprensible sobre ellos y sobre las implicaciones de la selección, no hay ninguna razón que permita concluir que esa obligación no debía ser atendida por el Instituto de Seguros Sociales, respecto de quienes lo seleccionaron, así fuera en forma tácita, el 1 de abril de 1994, puesto que en ese momento ya estaba en vigencia el citado artículo 13 de la Ley 100 de 1993, del que se deriva esa obligación.

Pues es muy claro, teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda y los hechos narrados, que el fundamento usado por la parte actora para que se configure una conducta, un daño y nexo de causalidad entre estos dos, radica en una supuesta falta al deber de información, no como lo interpreta el Juez de primera instancia, en cuanto a las consecuencias de la ineficaz del traslado de régimen, ya que así no fue pedido, ni entendido, dentro del escrito de demanda para que se entienda configurado la conducta y el daño, dando así, en que la causa del llamamiento en garantía gira en torno del deber de información y no en las consecuencias en la ineficacia del acto jurídico de traslado pensional ya declarado.

En efecto, desde sus primeras decisiones sobre el particular, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que las obligaciones de las administradoras de pensiones se predicen respecto de quien va a seleccionar un régimen, pero también de quien ya lo hizo, por lo que se predicen de las administradoras de los dos regímenes:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.” (CSJ. Sala de Casación Laboral, Sentencia del nueve de septiembre de dos mil ocho. Radicado número. 31.989).

No puede existir un trato diferenciado entre quienes optan por el régimen de ahorro individual y quienes lo hacen por el de prima media, consistente en que para estos no existe ningún derecho a recibir una información suficiente sobre las implicaciones de su decisión, mientras que aquellos sí tienen derecho a una asesoría que les permita conocer las características de los dos regímenes y las consecuencias de su decisión.

Se ha precisado por la jurisprudencia, igualmente, que la libertad de una decisión como la selección de un régimen pensional solo existe cuando ha estado acompañada de la información precisa en las que se delimiten los alcances positivos y negativos de esa decisión, pues, de no ser así, debe considerarse que no estuvo precedida de una comprensión suficiente y de un real consentimiento.

Entender que esa información completa, suficiente y comprensible no debía darse a quienes estaban vinculados al régimen de prima media el 1 de abril de 1994 equivale a presumir que ella no era necesaria por cuanto tenían suficiente conocimiento de ese régimen y, además, también conocían el de ahorro individual, que no seleccionaron pudiendo hacerlo y, por ello, tenían plena consciencia de las implicaciones de su decisión.

De aceptarse ese entendimiento, entonces, habría que concluir que quien optó por permanecer en el régimen de prima media con prestación definida lo hizo con suficiente conocimiento de los dos regímenes pensionales y de las consecuencias de su decisión, por lo que, al trasladarse posteriormente de régimen pensional, ya tenía una comprensión suficiente de las características, las diferencias, los requisitos para acceder a las prestaciones y las modalidades pensionales que cada uno de ellos ofrece.

En consecuencia, es palmario que el administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida no es un simple espectador indiferente sin ninguna responsabilidad en la ilustración de quien tomó la decisión de seleccionarlo para manejar su futuro pensional y por ello también le corresponde acreditar que cumplió con la obligación a su cargo en esa materia.

Así las cosas, es claro que la demandante realizó su afiliación inicial al Sistema de Seguridad Social con el Instituto de Seguros Sociales hoy administrado por Colpensiones, y en virtud de un acto deliberado, informado y consciente, suscribió formulario de traslado de régimen pensional con mi representada. Es decir, para la fecha en que la demandante decide realizar su traslado de régimen pensional, el Instituto de Seguros Sociales tenía pleno conocimiento de la existencia de éste nuevo régimen, toda vez que el mismo se encontraba vigente a partir del 01 de abril de 1994, y en virtud de ello, tenía el deber de advertir e informar a su afiliada de las características que presentaba el mismo, por lo que no puede entenderse y exigirse al mismo tiempo que el deber de información recaiga solamente en las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

LA DEMANDANTE SE ENCUENTRA VÁLIDAMENTE VINCULADA EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA.

Considera mi representada que deberá admitirse el llamamiento en garantía realizado, pues la reclamación principal de la demandante y en el hecho en el cual fundamenta su solicitud de perjuicios, es el retardo en el reconocimiento de su prestación económica por vejez, con base en la omisión al deber de información, por lo que será esa Entidad quien deberá pronunciarse sobre el mismo, ya que en virtud del proceso con radicación 11001310503020180059800 es Colpensiones quien en la actualidad administra los recursos de la demandante, y quien tiene a su cargo el reconocerle las prestaciones económicas a la actora, atendiendo a la ficción de que estas siempre permaneció vinculada en el RPMD, sin solución de continuidad, por lo que el administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida no es un simple espectador indiferente sin ninguna responsabilidad, pues además del deber información que tenía en su cabeza al momento del traslado, actualmente tiene el deber de reconocerle a la actora sus prestaciones económicas bajo la ficción antes expuesta.

En los términos expuestos solicita sea revocado el auto recurrido, para que en su lugar se admita el llamamiento en garantía requerido.

3. CONSIDERACIONES:

En primer lugar, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 65 del CPT y la SS, es apelable el auto que rechace *la intervención de terceros*.

Precisado lo anterior, debe indicarse que la figura del llamamiento en garantía no está regulada de manera expresa en el procedimiento laboral, por lo que, en virtud del principio de la aplicación analógica de la ley, se emplea la definición contenida en el artículo 64 del Código General del Proceso, cuyo tenor es:

“Quien **afirme** tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demandada o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”. (Resaltos fuera de texto)

De una lectura de la norma, y en atención a la modificación que esta preceptiva realizó al Código de Procedimiento Civil, basta con realizar una afirmación para que se acepte la integración de ese tercero como obligado a responder por las obligaciones a cargo de quien efectúa el llamado. Esa afirmación mínimamente debe respaldarse en la ley o en algún clausulado contractual, otra cosa es que sólo al emitir sentencia se habilite al operador jurídico para examinar o no la prosperidad de lo pretendido a través del llamamiento en garantía, oportunidad en la que se analiza o bien si se cumple el supuesto de hecho de la norma que consagra determinada consecuencia jurídica, o bien los efectos de lo pactado entre las partes. Ello quiere decir que se deben cumplir unos requisitos formales, sin que interese si la petición tiene o no vocación de prosperidad respecto de la delegación de la responsabilidad, análisis propio de una sentencia.

Sobre esta figura aludida, la Corte Suprema de Justicia, es sentencia de radicación 28246, M.P. Eduardo López Villegas, indicó que:

“...el llamamiento en garantía tiene una naturaleza eventual, en la medida en que está subordinada al resultado de la pretensión principal. Solo en el evento de resultar adversa la sentencia a quien llama en garantía, y solo en ese caso, se abre la puerta para que el juzgador examine la denominada pretensión revérsica e in eventum”

Así las cosas, la figura en mención alude a una de las formas de vinculación de los terceros al proceso, en la cual el sujeto pasivo de la acción convoca a otro con el cual se encuentra unido a través de una relación legal o contractual y que puede tener interés en el resultado del proceso, pues en caso de una eventual condena para el llamante, puede generarse la obligación para el interviniente de dar cumplimiento a las **obligaciones dinerarias de naturaleza compensatoria o indemnizatoria**, que se originan en virtud de la condena judicial, obligaciones que se desprenden del acuerdo contractual o del vínculo legal que existe con el demandado. De vieja data esta Corporación ha sostenido que: *“El llamamiento en garantía constituye una citación forzada de terceros que se presenta cuando entre la parte y el tercero citado existe una relación de garantía. Así mismo, el llamamiento tiene como objetivo que el tercero citado se torne en parte, a fin de hacer valer en el mismo proceso, por economía procesal, las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar (...)”*¹

Tal figura también propende por la salvaguarda del principio de economía procesal, pues evita un nuevo desgaste de la administración de justicia al iniciar otro proceso para desatar la relación con el garante, siendo posible que se haga en el proceso original.

En cuanto a los requisitos que se deben cumplir para efectuar el llamado en se encuentra, entre otros, la enunciación de los hechos en que se basa y los fundamentos de derecho que se invoquen, tras ello

¹ Auto del 15 de febrero de 2005, en el proceso de Diana Zapata Hurtado y otras, contra el ISS y Otros, M.P. Héctor Gómez Zuluaga

debe aceptarse el llamamiento, ello al margen de la discusión que se pueda propiciar, así como la resolución del caso en la sentencia.

Ahora, para la Sala son claros los términos en que se fundamenta el llamado, ya que se pretende que el administrador primigenio sea convocado con apego a lo normado en el art. 13 de la Ley 100 de 1993, y asuma el pago de la condena, claro está, una vez se defina por parte del operador jurídico si Porvenir S.A. debe responder por el perjuicio pretendido.

En otras palabras, Porvenir S.A. aduce que el cimiento de su postura NO tiene un fundamento contractual sino legal, y así lo reitera en el recurso de alzada; ahora, en un análisis propio de la sentencia, el a quo advierte que ningún fundamento existe para exigir de ese tercero el pago de algún emolumento y/o indemnización, y que mucho menos la ley consagra que deba responder por la condena que pueda imponérsele a Porvenir, lo que torna improcedente la admisión del llamamiento en garantía a Colpensiones.

NO obstante, como se dijo, lo que pueda o no ilustrar la ley, sólo es dable analizarlo en la sentencia, sin que le sea dable al fallador asumir de entrada que el contenido de las pretensiones del llamamiento, están encaminadas al fracaso ante la inexistencia de relación legal o contractual que dé lugar al planteamiento esbozado por la administradora del RAIS. Así pues, aunque esta Magistratura comparta o no la tesis del juez, otro es el quid del asunto ya que todo el pensamiento del fallador debe verterse en la sentencia, NO así cuando se admite el llamamiento.

Piénsese que el fundamento lo comportase una póliza, óptica bajo la cual, NO se espera que en una etapa tan temprana el operador jurídico analice el clausulado para efectos de establecer si la aseguradora debe o no pagar algún concepto, basta con que se allegue la aludida póliza. Algo similar sucede en este caso, donde se invoca la ley, cumpliéndose con el requisito formal que establece la norma, otra cosa es que de su articulado en efecto pueda o no derivarse la obligación de Colpensiones, asunto que, se insiste, debe estudiarse en la sentencia.

Respecto al tema, la Sala de Casación Laboral mediante Auto AL2622-2020, adujo que:

“(…) La figura del llamamiento en garantía, prevista en el artículo 64 de CGP, antes en el artículo 57 del CPC, permite que quien es parte en el proceso pueda lograr la incorporación al debate de un tercero, quien, en virtud de un vínculo legal o contractual, en el evento en que el convocante sea hallado responsable frente al promotor del litigio, pueda ser condenado a reembolsar a éste lo pagado, como consecuencia de la condena pecuniaria a él impuesta.

Es decir, como lo explicó la Sala Civil de la Corte en la providencia CSJ AC2900-2017, que reitera las reglas de las sentencias CSJ SC, 16 dic. 2006, rad. 2000-00276-01 y CSJ SC5885-2016, dicha figura tiene fundamento en una relación material de garantía de

naturaleza personal, en virtud de la cual el llamante puede solicitar «transferir al citado las consecuencias pecuniarias desfavorables previstas para el convocante interviniente en el litigio e insertas en el fallo». (...)»

Aunado a lo anterior, ilustrativo resulta el artículo 66 CGP al señalar que: “(...) *En la **sentencia** se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía. (...)*”, lo que quiere decir que la procedencia del llamamiento sólo estará sujeta a la invocación y/o mención de la existencia de responsabilidad, sea legal o contractual, aspecto que será objeto de constatación, según la intención del legislador, al momento de definir de fondo el litigio.

Fue precisamente este el razonamiento efectuado por esta Magistratura, en la Sala que preside la Dra. María Nancy García García, radicado 05001-31-05-015-2020-00057-01, cuando en asunto de contorno parecido, señaló que:

En ese sentido vale la pena citar al Profesor Jairo Parra Quijano, quien al referirse a la figura de la denuncia del pleito –entendida como análoga al llamamiento en garantía- expuso que: “(...) *el juez para admitir la denuncia debe estudiar, si se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 54 y ss. del C. de P.C, pero no entrar a estudiar el fondo de la responsabilidad del llamado que será precisamente objeto de la sentencia. Esa misma limitación será la que permita al despacho de los recursos que se interpongan contra el auto que ordena o niegue el llamamiento (...)*”².

De acuerdo con la nueva disposición se trata de una mera manifestación afirmativa que hace el llamante, de tener el derecho a ser avalado por un tercero, o incluso, por una parte vinculada al proceso, en caso de salir aquel responsable de la condena; sin que sea requisito en ese punto de la contienda, la demostración acerca del origen de tal garantía, legal o contractual; aspecto que en efecto fue atendido por el recurrente, sustentada en la normativa que estima como cimiento de su aspiración, deprecando la vinculación de PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A. como llamadas a responder ante una eventual decisión contraria a sus intereses (condenatoria), correspondiéndole al Juzgado de primera instancia, imprimir el trámite correspondiente y resolverlo en la sentencia en el evento de ser necesario.

Las consideraciones que preceden conducen a revocar el auto apelado en cuanto a la negativa al llamamiento formulado por la recurrente, para en su lugar, ordenar al Juzgado que dé trámite al mismo, de no advertir otros motivos que lo hagan improcedente.

En tal sentido, se satisfacen los supuestos que consagra la norma para que se pueda admitir el aludido llamamiento, razón por la que se **REVOCARÁ** la decisión objeto del recurso de alzada, y en su lugar se ordenará al a quo admitir y dar trámite al aludido llamamiento.

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

² Pág. 232. Los terceros en el Proceso Civil, Séptima Edición, Jairo Parra Quijano, Librería Ediciones del Profesional Ltda.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, SALA TERCERA LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **RESUELVE**

PRIMERO: REVOCA la decisión proferida el 9 de febrero de 2023 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **BLANCA NORVY BUITRAGO VELÁSQUEZ** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 35.313.455, contra **PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.**, y en su lugar se ordena **ADMITIR** y dar trámite al llamamiento en garantía que la primera de dichas administradoras realizó a Colpensiones, conforme lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 121 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 17 DE JULIO DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>